

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Fujimori y El Niño [Fujimori and El Niño]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Rospigliosi, Fernando
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-07 18:57:01
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/219366

Nueva Sociedad Nro. 154 Marzo-Abril 1998, pp. 6-13

Fujimori y El Niño. Campaña reeleccionista en aguas turbias

Fernando Rospigliosi

Fernando Rospigliosi: politólogo y periodista peruano, especializado en temas militares y relaciones cívico-militares; columnista de *La República*; profesor de la Universidad de Lima.

Palabras clave: situación política, sistema político, Fujimori, Perú.

Con largas botas de jebe, chapoteando en el agua, el presidente Alberto Fujimori se subió a un tractor y sentado al lado del conductor le indicó por dónde debería ir, qué maniobras realizar y cómo limpiar el cauce del río. La escena, captada por las cámaras de televisión en la costa norte del Perú, se repitió en todos los noticieros nocturnos. Al día siguiente, el presidente se trasladó en un helicóptero del ejército a la sierra central, donde personalmente indicó a los choferes de ómnibus cuándo deberían avanzar y cuándo detenerse, mientras trabajadores limpiaban el lodo y las piedras del último alud que había bloqueado la carretera. Otra vez, en la noche, los noticieros de TV abrieron sus ediciones con esas imágenes y los diarios del día siguiente las recogieron en sus primeras planas. Así un día tras otro.

A principios de enero, el fenómeno de El Niño empezaba a manifestarse en el Perú. El gobierno se había preparado desde seis meses antes para la emergencia y realizado algunas obras de prevención. Esta vez no sucedería como en 1982-83, decía Fujimori, cuando El Niño causó considerables daños. Esta vez sí existe un gobierno eficaz y el presidente en vez de quedarse en Palacio de Gobierno, se encarga personalmente del trabajo.

Durante varias semanas, Fujimori repitió diariamente el esquema, acompañado siempre de las cámaras de televisión amigas y las inamovibles reporteras que lo siguen en sus recorridos. La imagen que se pretendía transmitir era simple, como simples son las mentes castrenses que diseñan los movimientos de Fujimori: se trata de un presidente-trabajador y no de un presidente-político. Salvo

contadas excepciones, Fujimori sólo habla del fenómeno del Niño y de la ayuda a los damnificados. No se pronuncia sobre los acontecimientos políticos, porque él, como Francisco Franco o Augusto Pinochet, no es un político.

Leguleyadas

Entretanto, el Congreso estuvo paralizado durante semanas por una agria disputa entre la oposición y el oficialismo. A mediados de diciembre de 1997, la mayoría gobiernista aprobó una ley que la minoría denominó «ley del fraude». Se trata de un dispositivo que permite a magistrados «provisionales» de la Corte Suprema y del Ministerio Público (fiscalía) participar con voto en las decisiones de sus organismos. Los magistrados «provisionales» son designados por mecanismos que, en esencia, dependen del gobierno. Jueces y fiscales «provisionales» existen desde el golpe del 5 de abril de 1992, como situación supuestamente transitoria y de emergencia, transitoriedad que ya dura seis años. El asunto es que a mediados de 1998, dos de los cinco miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) serán renovados, precisamente los representantes de la Corte Suprema (que lo preside) y del Ministerio Público. Es decir, mediante la «ley del fraude», el gobierno se asegura a dos de los cinco miembros del JNE, en un contexto en que ese Jurado deberá decidir sobre la controversia de si el presidente Fujimori puede postular o no para un tercer período consecutivo en el año 2000.

La Constitución vigente, redactada por los partidarios de Fujimori después del golpe de 1992, introdujo la reelección presidencial inmediata *por una vez* («El Presidente puede ser reelegido de inmediato *para un periodo adicional*», art. 112), rompiendo con una larga tradición política y constitucional peruana que la prohibía terminantemente. Fujimori se hizo reelegir en 1995 y al año siguiente, el Congreso dominado por el oficialismo aprobó una ley de «interpretación» de la Constitución, en la que establece que la de 1995 fue la primera elección de Fujimori con la nueva Constitución. Por tanto, podría postular nuevamente en el año 2000. En realidad, una leguleyada. Tres miembros del Tribunal Constitucional emitieron un fallo declarando que la ley de «interpretación» no era aplicable y como represalia fueron destituidos por la mayoría oficialista del Congreso a principios de 1997, en una acción que ocasionó el rechazo de casi el 80% de la población según las encuestas y propició manifestaciones antigubernamentales en todo el país.

En febrero de 1998, la Sala Constitucional de la Corte Suprema, cuya composición había sido cambiada poco antes para integrarla mayoritariamente con jueces «provisionales», falló a favor de un recurso presentado por una congresista fujimorista que pedía que se amparara su derecho a votar por Alberto Fujimori en el año 2000. El fallo ha sido considerado absurdo por juristas y constitucionalistas, porque la Corte Suprema no puede refutar al Tribunal Constitucional que, como se ha mencionado, había resuelto que Fujimori no puede postular en el 2000.

Pero no importa cuán absurda y jurídicamente aberrante pueda ser esa decisión de los jueces «provisionales». Ahora existe una controversia jurídica, porque algunos sostienen que el fallo del Tribunal Constitucional es válido mientras los partidarios del gobierno dicen que vale el de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Entonces será el Jurado Nacional de Elecciones el que tendrá que decidir si se acepta a Fujimori como candidato en el 2000. De ahí que el gobierno pretenda asegurarse un fallo favorable, manipulando la nominación de dos miembros de ese organismo. Después buscará la forma de chantajear y presionar a por lo menos uno más, con lo cual obtendrá mayoría.

Para la oposición esta maniobra fue la gota que rebasó el vaso y apenas aprobada a mediados de diciembre de 1997 la «ley del fraude», sus parlamentarios realizaron protestas con carteles alusivos a la trampa en el recinto del Congreso. Las sesiones se suspendieron. Es en ese contexto que el presidente Fujimori inició una nueva campaña política, esta vez montado en el fenómeno del Niño, con una estrategia que viene repitiendo desde hace tiempo y que consiste en no hacer declaraciones «políticas». Así, mientras sus partidarios seguían adelante con la preparación del terreno «legal» para una nueva reelección, Fujimori fingiendo desinterés por esos problemas se dedicaba a trabajar por el país, de una manera visible, directa, elemental. Con una pala en la mano quitaba el lodo de una acequia un día. Aupado en un bote de goma que halaban varios soldados con el agua al pecho, recorría las calles de una ciudad anegada, otro día.

Para su satisfacción la estrategia le dio resultado, como en otras oportunidades. La tercera semana de enero las encuestas mostraban que había subido 3 o 4 puntos. Con gran precisión, los sondeos de opinión que realizan cuatro empresas se efectúan sólo en Lima. Es decir, en la ciudad donde la población se entera de lo ocurrido en el país básicamente a través de la TV. En otras palabras, las encuestas no recogen la opinión de las personas que viven en los lugares afectados por el fenómeno del Niño, sino la interesada imagen que proyectan las pantallas televisivas.

Sin embargo, a fines de enero las cosas se le complicaron a Fujimori. El Niño empezó a cobrar inusitada intensidad y se extendió a casi todo el país, incluyendo lugares que el gobierno no había considerado en sus planes de emergencia. Los ríos se desbordaron simultáneamente en varios puntos del norte y del sur inundando ciudades, pueblos y cultivos, las carreteras fueron interrumpidas en decenas de lugares, muchas ciudades quedaron aisladas, sin agua y sin electricidad. Los damnificados ya no eran unos pocos miles sino cientos de miles.

Al mismo tiempo, congresistas de la oposición cambiaron su táctica. Hasta ese momento habían permanecido en Lima, centrando su atención en la «ley del fraude». Luego, varios de ellos empezaron a viajar a las provincias afectadas, a

conversar con la población, a reunirse con los alcaldes y las instituciones representativas. Cuando comenzaron a transmitir lo que realmente estaba ocurriendo, la percepción que existía hasta ese momento empezó a cambiar. Se descubrió que las obras de prevención que había construido el gobierno sirvieron para muy poco. Estaban mal hechas o eran insuficientes. Que cuando Fujimori viajaba a los lugares afectados no escuchaba jamás a los pobladores, salvo los pocos segundos que se requerían para que las cámaras lo filmaran conversando con algún damnificado. El llegaba, daba órdenes, participaba directamente en algunas obras, repartía algunos regalos y se iba. Pero incluso, a veces, hasta la ayuda que llevaba era ficticia. Periodistas acuciosos descubrieron que en ocasiones lo que Fujimori entregaba se lo quitaban luego a los beneficiarios: servía sólo para las cámaras de TV.

En las localidades afectadas empezaron a escasear los alimentos, en algunos lugares se produjeron saqueos y, en general, el recibimiento que los pobladores brindan al presidente Fujimori ha cambiado sustancialmente. Ahora no lo esperan con la ilusión de que traerá soluciones inmediatas sino con la indignación de quienes han recibido promesas y han sido defraudados.

Centralismo asfixiante

Uno de los defectos claves que explican la ineficacia del gobierno para enfrentar el fenómeno del Niño, es el opresivo centralismo que practica. El Perú es históricamente un país centralista. Lima, la capital, concentra un tercio de la población total, 80% de la industria y todas las decisiones políticas y burocráticas importantes. Con la restauración de la democracia, en 1980, se inició un lento proceso de descentralización que fue abruptamente interrumpido con el golpe del 5 de abril de 1992. Esto encaja también con la tradición de que los gobiernos autoritarios son también los más centralistas.

Así, desde el golpe, los gobiernos y asambleas regionales elegidos por voto popular, que habían empezado a funcionar en la década del 80, fueron abolidos y reemplazados «transitoriamente» por delegados del gobierno central, en muchos casos militares en retiro. En febrero de 1998 la mayoría fujimorista aprobó en el Congreso una ley que prorroga indefinidamente a los representantes «transitorios» del gobierno central en las regiones. La otra pinza de la tenaza centralista se ha aplicado sobre los municipios. En el Perú existen unas 200 provincias y 1800 distritos que eligen a alcaldes y concejales. La elección de éstos también fue restituida con la democracia en 1980. Después del golpe de 1992, una de las exigencias de la comunidad internacional fue que se respetaran las elecciones municipales. El gobierno cívico-militar ideó entonces una manera de controlar los municipios, que fue recortarles persistentemente atribuciones y presupuesto. Hoy día los municipios tienen mucho menos funciones que en 1992 y su presupuesto depende más del gobierno central.

Esta política tenía también un objetivo más específico, que era destruir las

posibilidades políticas del entonces alcalde de Lima, Ricardo Belmont, un «independiente» como Fujimori que tuvo la temeraria idea de disputarle al presidente las elecciones de 1995. Belmont, el primer independiente exitoso en la política peruana, fue elegido alcalde en 1989 y reelegido tres años después. Pero el gobierno tuvo éxito en arruinar la gestión de Belmont en el municipio con los métodos señalados.

Hoy día, el nuevo alcalde limeño, Alberto Andrade, también un «independiente», aparece en las encuestas como el más serio rival de Fujimori para las elecciones del año 2000. La estrategia del gobierno para recortar atribuciones a los municipios tiene por eso, hoy también, un objetivo específico, que es el de destruir a Andrade, además del propósito más general de concentrar el poder e impedir el surgimiento de movimientos contestatarios en las provincias.

Otra razón por la que Alberto Fujimori y los militares que cogobiernan desarrollaron esta estrategia de control de los municipios, es que no tienen ni quieren un partido político. Tienen sólo un rótulo electoral, que inclusive van modificando en cada elección. Sin un partido organizado es imposible postular miles de candidatos en las provincias y distritos del país. Por eso también, han recurrido al método de debilitar a los municipios.

La debacle de los partidos políticos ha ayudado a Fujimori. Antes, tres o cuatro partidos que postulaban candidatos en casi todos los municipios se distribuían la torta electoral. Llegado el caso, los alcaldes agrupados en partidos y alianzas, constituían una fuerza política que eventualmente podía contrapesar al gobierno. Hoy día casi todos los municipios están ocupados por independientes, sin ninguna vinculación entre sí. Esos alcaldes son fácilmente presionados por el gobierno, que puede aumentarles o disminuirles el presupuesto, construir obras o no en su localidad.

Estas características centralistas y autoritarias del gobierno de Fujimori se han hecho patentes en la coyuntura actual cuando, para enfrentar al fenómeno del Niño, se ha repetido el esquema. Así, prácticamente nada se mueve en el país si no lo decide el propio presidente. En las obras de prevención, iniciadas en 1997, Fujimori no consultó con los alcaldes ni con nadie. El resultado ha sido que muchas estaban mal realizadas o simplemente no se construyeron las que se necesitaban.

De igual manera cuando ciudades, pueblos y cultivos han sido arrasados por lluvias torrenciales y desbordes de ríos, la ayuda no llegaba si Fujimori no se hacía presente. Y cuando aparecía, no se dignaba entrevistarse con las autoridades locales ni escuchaba sus demandas. Sólo coordinaba con los militares de cada zona. Esta política ha sido desastrosa. La ayuda ha llegado lenta e ineficazmente y a veces ha sido robada por funcionarios inescrupulosos, generando un creciente descontento de la población afectada.

La personalización de la política practicada por Fujimori le ha dado buenos resultados por mucho tiempo, pero en casos como este podría volverse en contra; porque si las cosas empiezan a salir mal y él es quien ha aparecido como único responsable de todo, el descontento popular también se concentra en su figura. Sin embargo, Fujimori y la cúpula cívico-militar que lo acompaña tienen aún numerosos recursos.

El programa de la reelección

En la campaña electoral de 1995, el candidato Alberto Fujimori *no realizó un solo mitin político*, un caso único en la historia peruana. Pero efectuó cientos de inauguraciones en todo el país. Caminos, escuelas y cuanta obra pública se construyera era inaugurada personalmente por Fujimori y cubierta puntualmente por las estaciones de TV, casi todas alineadas con el gobierno.

De hecho, la campaña de reelección había sido cuidadosamente planificada. Los servicios de inteligencia y los destacamentos militares en todo el país realizaron encuestas determinando qué obras necesitaba y demandaba cada localidad, sobre todo aquellas en que los sondeos mostraban que al presidente no le iba bien. El Estado gastó miles de millones de dólares en obras, cuya secuencia de inauguraciones fue programada para coincidir con la campaña electoral.

Además, los servicios de inteligencia espionaron y sabotearon sistemáticamente la campaña de los rivales de Fujimori. El último reportaje de investigación que logró difundir el Canal 2 en 1997, antes que su dueño Baruch Ivcher fuera despojado arbitrariamente de su propiedad, presentó la transcripción de más de 1.000 grabaciones en los teléfonos de la casa de Javier Pérez de Cuéllar, ex-secretario general de las Naciones Unidas y candidato rival de Fujimori en 1995. Las grabaciones fueron realizadas por los servicios de inteligencia durante la campaña electoral y permitieron al gobierno enterarse de todos los movimientos de su adversario. Por supuesto, las investigaciones oficiales sobre el espionaje telefónico no han avanzado.

Inmediatamente después que Fujimori ganara las elecciones de 1995, el gasto público sufrió un brusco frenazo. La bonanza económica que había vivido el país en la etapa previa y que fue un factor decisivo en la reelección, se convirtió en recesión. Las expectativas frustradas de la población, que creyó que en un segundo periodo fujimorista sería resarcida de las penurias del primero, explican la sostenida caída de su popularidad.

Para las elecciones del año 2000 Fujimori y la cúpula cívico-militar tenían planeado aplicar el mismo esquema de 1995. Sin embargo, algunos sucesos les han hecho modificar sus planes. Primero, el factor mencionado, el descenso de la popularidad presidencial, provocado fundamentalmente por la situación económica pero a lo que se ha añadido el rechazo al autoritarismo. Después del golpe de 1992, la mayoría apoyó al régimen dictatorial con la esperanza de que

resolviera los graves problemas del país. Pero cuando los ciudadanos han percibido que las cosas no mejoran al ritmo esperado, han empezado a asignarle importancia a las características autoritarias del gobierno, que antes parecían no importar.

En otras palabras, la gente percibe claramente que es un gobierno que no respeta las leyes y que tiene la intención de perpetuarse a cualquier precio. Eso, en un momento, pareció no ser un obstáculo para que Fujimori contara con el respaldo mayoritario de la población. Pero cuando el descontento empieza a crecer, la idea de que Fujimori permanezca cinco años más en el gobierno sí preocupa y se convierte en motivo de rechazo.

Fujimori y la cúpula cívico-militar no tienen manera de evitar que la gente los perciba como un gobierno autoritario con dominante presencia castrense. Pero usan la situación crítica de la mayoría, que vive en condiciones precarias, sin empleo estable y con ingresos reducidos, para manipularla políticamente. El plan original era un ajuste económico después de las elecciones de 1995 que se prolongaría todo 1997. En 1998 el Estado empezaría nuevamente a inyectar dinero a la economía y en 1999 sería la gran fiesta del gasto público. El resto del trabajo lo harían los servicios de inteligencia, espionando e infiltrando a la oposición y manipulando el sistema electoral si fuera necesario.

Pero el descenso sostenido de la popularidad de Fujimori obligó a adelantar el plan de gasto público, que empezó a mediados de 1997. El segundo factor que ha motivado una modificación de los planes reeleccionistas es el fenómeno del Niño, que Fujimori pretendía utilizar como una muestra de la eficacia de su gobierno. Sin embargo, como la furia de la naturaleza ha rebasado sus previsiones y las pérdidas son muy grandes, su programa para la reelección se enfocará ahora en la reconstrucción de los daños, antes que en la construcción de nuevas obras.

Apenas amainen las lluvias y desbordes de ríos –el gobierno calcula que será en marzo o abril–, Fujimori anunciará la reconstrucción de las zonas afectadas. Las obras estarán programadas para terminarse en vísperas de las elecciones del 2000 y serán inauguradas todas por Fujimori. Allí se invertirá el dinero de las privatizaciones, varios miles de millones de dólares, que están depositados en cuentas secretas en bancos desconocidos. Lo que queda, claro está, después de los gastos militares –también secretos, por supuesto– efectuados luego del conflicto con Ecuador en 1995, que han consumido parte muy importante del producto de la venta de empresas públicas.

De esta manera, el presidente-candidato, siempre en campaña electoral, espera continuar en el poder por un nuevo periodo, convirtiéndose en el gobernante más longevo de la historia peruana –el récord lo tiene otro dictador civil, Augusto Leguía, que gobernó 11 años consecutivos entre 1919 y 1930.

La oposición

Pero Fujimori no cuenta sólo con sus propias fuerzas, sino también con el agotamiento de sus adversarios. Desde fines de los 80, los partidos políticos llamados «tradicionales» no han cesado de debilitarse, a tal punto que en 1995 ninguno pudo superar la barrera del 5% de los votos. El problema no es solo que los partidos antiguos languidezcan sino, más grave quizás, que no se han constituido nuevas agrupaciones. En las últimas elecciones lo que ha aparecido y desaparecido son meras listas electorales, sin organización ni ideología, algunos de cuyos miembros llegan al Congreso y allí se dispersan. La Unión Por el Perú (UPP) de Javier Pérez de Cuéllar, que obtuvo el segundo lugar en las elecciones de 1995, es un conglomerado sin perspectiva y sin liderazgo –Pérez de Cuéllar no volverá a postular por razones de edad y permanece la mayor parte del tiempo fuera del país–, que sólo sigue existiendo porque tiene inscripción electoral, es decir, es un partido reconocido oficialmente y puede presentar candidatos. Muchos partidos han perdido su inscripción y como el gobierno ha establecido requisitos muy difíciles de cumplir, el reconocimiento legal es hoy en día un bien muypreciado.

El alcalde Alberto Andrade ha resistido hasta ahora los embates del gobierno y tiene altos niveles de popularidad. Dice que es un «independiente» y no un político. En los últimos meses ha constituido un movimiento –ahora nadie quiere usar la etiqueta de «partido»– con miras a las elecciones municipales de octubre de 1998, donde se postulará a la reelección a la Alcaldía de Lima. Para contrarrestar a Somos Perú, el movimiento de Andrade, el gobierno ha formado otro grupo, Somos Vecino, que también presentará candidatos en las municipales.

Como se ha dicho, el gobierno hasta ahora no presentaba candidatos en la mayoría de municipios, porque tenía otros mecanismos para controlar a los alcaldes. Ahora, sin embargo, su interés no reside tanto en controlar los municipios, sino en impedir la expansión del movimiento de Andrade, que puede convertirse en un rival serio para el 2000.

El resto de la oposición sigue dividida y sin tener una idea clara de qué hacer. Algunos pretenden constituir una coalición como la Concertación chilena que derrotó a Pinochet. Pero en el Perú, a diferencia de Chile, no hay organizaciones políticas fuertes sino unos pocos partidos muy débiles y una multiplicidad de pequeños grupos y caudillos, con sus propias ambiciones y pareceres.

La iniciativa de una organización de la sociedad civil, el Foro Democrático, para realizar un referendo donde la población se pronuncie sobre la postulación de Fujimori en el 2000, podría constituirse en un serio obstáculo para las aspiraciones reeleccionistas del presidente. Pero para convocar al plebiscito la ley exige el respaldo del 10% del padrón electoral, lo cual implica aproximadamente 1.200.000 firmas, que hasta ahora no han podido ser

obtenidas, pese a que el 80% de la población, según las encuestas, apoya la realización de la consulta. Y eso ocurre por la debilidad organizativa del Foro Democrático y la falta de apoyo de los partidos políticos.

La propia figura de Andrade es causa de división. Algunos en la oposición piensan que lo más realista es apoyarlo para que derrote a Fujimori. Sólo apoyarlo, porque Andrade no parece dispuesto a concretar alianzas con nadie. Otros piensan que Andrade podría ser igual o peor que Fujimori. Incluso se dice –aunque él lo niega– que tiene tratos secretos con el jefe real del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, considerado en las encuestas el hombre más poderoso del país.

Por último cabe mencionar que en diciembre de 1997 un enfrentamiento público entre el presidente Fujimori y el comandante general del Ejército y presidente del Comando Conjunto de las FFAA, Nicolás Hermoza, hizo pensar que el triunvirato gobernante –Montesinos, Fujimori, Hermoza–, podía resquebrajarse. Fujimori y Hermoza disputaron por la paternidad de la operación Chavín de Huántar, que culminó con el asalto a la residencia del embajador japonés que había sido tomada por el MRTA. A pesar de los agravios públicos que recibió Fujimori, no pudo deshacerse de su socio, que permanece en el cargo desde diciembre de 1991. Este incidente mostró la fuerza que todavía conserva el general Hermoza, de hecho el único reemplazable en el triunvirato.

En suma, un gobierno cívico-militar que pretende perpetuarse indefinidamente en el poder sin respetar leyes ni instituciones, y que mantiene formas democráticas básicamente por presión de la comunidad internacional. Una oposición todavía débil y desorganizada. Y un pueblo pauperizado, que no encuentra hasta el momento ni mecanismos institucionales para canalizar sus demandas ni un liderazgo definido.

Lima, febrero de 1998